

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



“Al servicio de la justicia y de la paz social”

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO	EJECUTIVO SINGULAR (ACUMULADO)
DEMANDANTE	4G INGENIERIA S.A.S.
DEMANDANTE ACUMULADO	METALCIMIENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S
DEMANDADOS	ESTRUCTURAS DISEÑOS Y CONSTRUCTORES DEL CARIBE S.A.S. INTEC DE LA COSTA S.A.S. Y CONSORCIO METROPLUS ORIENTAL 2019
INSTANCIA	SEGUNDA –APELACIÓN AUTO-
PROCEDENCIA	JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
RADICADO	05001 31 03 001 2022 00040 02 INTERNO 2022-0257
PROVIDENCIA	AUTO INTERLOCUTORIO N° 042
TEMAS	DESISTIMIENTO TÁCITO-CUMPLIMIENTO CARGA DE LAS PARTES. CAPACIDAD PARA SER PARTE Y COMPARECER AL PROCESO DE LOS CONSORCIOS.
DECISIÓN	REVOCA
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, frente al auto de fecha 21 de noviembre de 2022 proferido por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, providencia mediante la cual se decretó el desistimiento tácito de este proceso ejecutivo, única y exclusivamente, respecto del demandado CONSORCIO METROPLÚS ORIENTAL 2019.

I. ANTECEDENTES

La sociedad **METALCIMIENTO ARQUITECTOS E INGENIERIA S.A.S.** actuando a través de apoderado judicial, formuló demanda ejecutiva acumulada en contra del **CONSORCIO METROPLUS ORIENTAL 2019**, y sus consorciadas, **INTEC DE LA COSTA S.A.S.** y **ESTRUCTURAS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.** (Archivo digital 03/ primera instancia), con pretensión de librar mandamiento de pago por las sumas de dinero contenidas en tres facturas, así:

“PRIMERA: Por concepto de **capital** de la factura No **FE 45**, una vez aplicado el abono señalado en el hecho 5 por la suma de **\$254.160.859**

SEGUNDA: Por concepto de **intereses de mora** por la factura No **FE45** los causados desde el día siguiente al del vencimiento de la factura, es decir; 18 de octubre de 2020 más lo causados hasta el momento definitivo del pago y a la tasa máxima legal permitida.

TERCERA: Por concepto de **capital** de la factura No **FE58** por la suma de **\$278.215.167**

CUARTA: Por concepto de **intereses de mora** por la factura No **FE58** los causados desde el día siguiente al del vencimiento de la factura, es decir; 20 de noviembre de 2020 más lo causados hasta el momento definitivo del pago y a la tasa máxima legal permitida.

QUINTA: Por concepto de **capital** de la factura No **FE67**, por la suma de **\$35.177.173**

SEXTA: Por concepto de **intereses de mora** por la factura No **FE67** los causados desde el día siguiente al del vencimiento de la factura, es decir; 15 de diciembre de 2020 más lo causados hasta el momento definitivo del pago y a la tasa máxima legal permitida.

SEPTIMA: Por las **COSTAS PROCESALES y AGENCIAS EN DERECHO”**.

Mediante providencia del 10 de marzo de 2022 el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN (Archivo digital 19/ primera instancia), resolvió librar mandamiento de pago en contra del CONSORCIO METROPLÚS ORIENTAL 2019, y sus consorciados INTEC DE LA COSTA S.A.S. y ESTRUCTURAS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S. y denegar el mandamiento respecto de la factura FE45, decisión confirmada por este Despacho en sede de segundo grado el 30 de junio de 2022 (Archivo digital 26/ primera instancia).

El JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en auto del 26 de septiembre de 2022, requiere a la parte demandante para que, en el término de treinta (30) días siguientes a la notificación de ese auto, proceda a integrar la litiscontestatio, so pena de terminar el proceso por desistimiento tácito (Archivo digital 27/ primera instancia).

Mediante correo electrónico con fecha 9 de noviembre de 2022 se remitió al JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN los resultados de la

citación para notificación realizada a la parte demandada, adjuntando acuse de recibido para los demandados INTEC DE LA COSTA S.A.S. y ESTRUCTURAS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. y, frente al CONSORCIO METROPLÚS ORIENTAL 2019, se arribó la constancia de “NO FUE POSIBLE LA ENTREGA” (Archivos digitales 28 y 29/ primera instancia).

Posteriormente, el 11 de noviembre de 2022 el abogado de la parte demandante remitió al juzgado de primer grado, constancia de envío de citación para notificación personal al demandado CONSORCIO METROPLÚS ORIENTAL 2019, a través de la empresa de envíos Servientrega (Archivos digitales 30 y 31/ primera instancia).

El 21 de noviembre de 2022 (Archivo digital 32/ primera instancia), el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN resolvió:

PRIMERO. DECRETAR el DESISTIMIENTO TÁCITO de que trata el artículo 317 del Código General del Proceso, en relación con el Proceso Ejecutivo adelantado por **Metalcimiento Arquitectos e Ingenieros S.A.S.**, identificada con **Nit. 900.509.825-0, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE** respecto del **Consortio Metroplus Oriental 2019**, identificada con **Nit. 901.293.042-4**, de conformidad con las razones expuestas.

SEGUNDO. TENER POR NOTIFICADAS POR CORREO ELECTRÓNICO a Intec de la Costa S.A.S., identificada con **Nit. 830.502.135-1** y **Estructuras Diseños y Construcciones del Caribe S.A.S.**, identificada con **Nit. 806.010.471-2**, desde el 17 de agosto de 2022, de consuno con la notificación aportada y en el marco de lo previsto en el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022.

TERCERO. ORDENAR SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN en contra de Intec de la Costa S.A.S., identificada con **Nit. 830.502.135-1** y **Estructuras Diseños y Construcciones del Caribe S.A.S.**, identificada con **Nit. 806.010.471-2**, una vez se encuentre ejecutoriada la presente decisión.

II. LA IMPUGNACIÓN.

En desacuerdo con tal decisión, formuló el apoderado judicial de la sociedad METALCIMIENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S. los recursos de reposición y en subsidio apelación en contra del auto que declaró terminación

por desistimiento tácito respecto del CONSORCIO METROPLÚS ORIENTAL 2019.

Para argumentar su inconformidad inicia por reseñar las actuaciones que realizó para dar cumplimiento al requerimiento efectuado por el juzgado en auto del 26 de septiembre de 2022, aludiendo a la imposibilidad inicial de entregar la citación para notificación personal al CONSORCIO METROPLÚS ORIENTAL 2019 y, a la nueva remisión, vía correo certificado, a través de la empresa postal Servientrega, de la citación, como a la constancia de entrega efectiva del 10 de noviembre de 2022, concluyendo que dichas actuaciones en los términos del numeral 2 del artículo 317 del C.G.P. interrumpen los términos previstos en esa norma.

Por lo anterior, solicita se reponga el auto de 21 de noviembre de 2022 y se continúe con el trámite normal del proceso, esto es, se autorice la notificación por aviso para CONSORCIO METROPLÚS ORIENTAL 2019 (Archivo digital 33/ primera instancia),

El juzgado procede a decidir el recurso de reposición mediante auto del 5 de diciembre de 2022, providencia en la que se mantuvo la decisión y concedió, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente (archivo 35. Primera Instancia).

III. CONSIDERACIONES

1. EL DESISTIMIENTO TÁCITO.

Conocido es que el procedimiento civil está orientado por un criterio tendencialmente dispositivo de donde se infiere que corresponde a las partes por regla general, el inicio e impulso de la serie. Así mismo, incumbe al Juez brindar el impulso pertinente cuando le concierna.

De manera que las partes tendrán la carga de cumplir con sus obligaciones procesales dentro de los términos que corresponda, así como el Juez cuando a él concierna, para que el objeto del proceso se verifique; si ello no ocurre,

surgen consecuencias que afectarán a la parte incumplida, o al juez cuando la demora se atribuya a él.

Para conjurar la inercia, desidia e inactividad de las partes en satisfacer una carga procesal o desplegar un acto de procedimiento, necesarios para proseguir la actuación que ha iniciado y es de su exclusiva incumbencia, se ha previsto como remedio figuras como la actualmente denominada *desistimiento tácito*, que además ha sido prevista como mecanismo de descongestión judicial.

Dicha figura fue inicialmente establecida por Ley 1194 de 2008, modificatoria del artículo 346 Código de Procedimiento Civil, encontrándose vigente en la actualidad la contenida en el artículo 317 del Código General del Proceso, que dispone en lo pertinente:

Desistimiento tácito. El desistimiento tácito se aplicará en los siguientes eventos:

1. Cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que se notificará por estado.

Vencido dicho término sin que quien haya promovido el trámite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendrá por desistida tácitamente la respectiva actuación y así lo declarará en providencia en la que además impondrá condena en costas.

El juez no podrá ordenar el requerimiento previsto en este numeral, para que la parte demandante inicie las diligencias de notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, cuando estén pendientes actuaciones encaminadas a consumir las medidas cautelares previas. (...) (Subrayas y negrillas fuera del texto original)

De conformidad con el numeral 1° de la norma, la carga que debe cumplirse para continuar con el trámite del proceso, debe ser ordenada por el juez para que su cumplimiento se lleve a cabo dentro de los treinta (30) días siguientes, vencido dicho término, si no se tiene la actuación de la parte que debía cumplir la carga, el juez tendrá por desistida tácitamente la respectiva

actuación, debiendo declararlo en providencia en la que además impondrá condena en costas.

El desistimiento tácito entonces, es una forma anormal de terminación del proceso, la instancia o la actuación y ocupa ahora el lugar que antes tenía la perención, figura con la cual tiene similitudes, pues tiene lugar a consecuencia de la inactividad de una parte y opera sin necesidad de que la parte la solicite.

Pertinente resulta mencionar que el desistimiento tácito ha sido entendido de diversas maneras; una de ellas es que se comprenda como la interpretación de la voluntad del peticionario de desistir de su pretensión o solicitud procesal, caso en el cual su finalidad es garantizar la libertad de las personas de acceder o no a la administración de justicia y la otra, como una sanción, en la medida en que opera por el incumplimiento de una carga procesal y se instituye como una manifestación de la potestad sancionadora del juez que se impone sin necesidad de recurrir a la ficción de que el peticionario ha desistido tácitamente de su solicitud. Entendido como una sanción, el desistimiento tácito busca garantizar el derecho de todas las personas a acceder a una administración de justicia diligente, célere, eficaz y eficiente, así como el derecho a obtener pronta y cumplida justicia, siendo por tanto una medida legal que pretende disuadir a las partes procesales para evitar las prácticas dilatorias en el trámite jurisdiccional.

2. CAPACIDAD PARA SER PARTE DE LOS CONSORCIOS

Este tema, que ha suscitado variadas discusiones aclaradas, especialmente en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, merece especial detalle y análisis de cara a establecer la forma en que los consorcios acuden a un proceso judicial.

Así entonces se tiene que el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993, dispone en lo pertinente:

“Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los

cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante.

Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.” (Resaltado intencional).

Ahora bien, el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, unificando jurisprudencia frente al tópico de la capacidad de los consorcios y uniones temporales para comparecer como parte en los procesos judiciales, en sentencia del año 2013 con ponencia del Consejero Mauricio Fajardo Gómez, llegó a la siguiente conclusión:

“En consecuencia, a partir del presente proveído se concluye que tanto los consorcios como las uniones temporales sí se encuentran legalmente facultados para concurrir, por conducto de su representante, a los procesos judiciales que pudieren tener origen en controversias surgidas del procedimiento administrativo de selección de contratistas o de la celebración y ejecución de los contratos estatales en relación con los cuales tengan algún interés, cuestión que de ninguna manera excluye la opción, que naturalmente continúa vigente, de que los integrantes de tales consorcios o uniones temporales también puedan, si así lo deciden y siempre que para ello satisfagan los requisitos y presupuestos exigidos en las normas vigentes para el efecto, comparecer a los procesos judiciales –bien como demandantes, bien como demandados, bien como terceros legitimados o incluso en la condición de litisconsortes, facultativos o necesarios, según corresponda–, opción que de ser ejercida deberá consultar, como resulta apenas natural, las exigencias relacionadas con la debida integración del contradictorio....”¹ (Resaltado intencional).

De otro lado, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 2015, M.P. Margarita Cabello Blanco, frente al inciso 2º del Parágrafo 1º del artículo 7 de la Ley 80 de 1993, antes citado, expuso:

“De donde surge que la ley brinda a los interesados la posibilidad de escoger la persona que, ‘para todos los efectos’, asumirá la representación del consorcio y, además, que ellos indiquen ‘las reglas básicas’ que regirán sus destinos.

Sin embargo, una es la situación que surge cuando el consorcio o las personas que le dieron vida deben enfrentar sus compromisos frente al contratante y otra, muy diferente por cierto, cuando es entre ellos que surgen las discrepancias y otra, muy diferente por cierto, cuando es entre ellos que surgen las discrepancias como aconteció en el sub-lite,

¹ Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, 03930, 2013.

hipótesis ésta que devela una confrontación no del ente de colaboración sino de sus agentes y respecto de las reglas básicas que fijaron para regular sus relaciones.”²

3. EL CASO CONCRETO

En este caso, de cara a la resolución adecuada del recurso de apelación, existen dos tópicos que deben estudiarse necesariamente por este Despacho, el primero, si en el *sub judice* se cumplían los presupuestos para terminar el proceso por desistimiento tácito y, el segundo, si de cara a la naturaleza de las entidades demandadas, fue adecuada la decisión de terminación parcial adoptada por el *a quo*.

1. Para abordar el primer tema, importante resulta reiterar que el proceso civil es de parte y corresponde a ellas, no sólo el inicio e impulso del mismo, sino además el cumplimiento de las cargas procesales impuestas por la ley, o el funcionario judicial, dentro de los términos que corresponda; así mismo, concierne al juez efectuar lo pertinente, para que el objetivo del proceso se cumpla, si ello no ocurre, surgen consecuencias que afectarán a la parte incumplida, o al juez, cuando la demora es atribuible a él.

Una de esas obligaciones que corresponde cumplir a la parte demandante en procesos como el que nos ocupa, es la de realizar lo pertinente para poder llevar a efecto la diligencia de notificación personal, pues en caso de no demostrar ello, dentro del término prudencial concedido por el legislador, previo requerimiento del juez, es posible aplicar de la figura del *desistimiento tácito*.

Con base en esa regulación procesal, el *iudex a quo*, en providencia de 26 de septiembre de 2022 (archivo 27. Primera Instancia), requirió a la parte demandante para que cumpliera con la carga de notificar en debida forma a la parte demandada CONSORCIO METROPLÚS ORIENTAL 2019, y sus consorciados, INTEC DE LA COSTA S.A.S. y ESTRUCTURAS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S., providencia en la que fue clara la exigencia de la actuación que debía adelantar, es decir, la parte demandante

² Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, SC17429, 2015.

tenía clara la carga que le correspondía cumplir y en dicho auto se le advirtió que el requerimiento debía acatarse dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de esa providencia, so pena de culminar el proceso por desistimiento tácito.

En un intento por cumplir el requerimiento, el 9 de noviembre de 2022 la parte demandante remitió al juzgado constancia de notificación donde adjuntó acuse de recibido frente a INTEC DE LA COSTA S.A.S. y ESTRUCTURAS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.; sin embargo, respecto al CONSORCIO METROPLÚS ORIENTAL 2019 adjuntó notificación con nota “*no fue posible la entrega*”, de modo que el término concedido venció, sin que la parte interesada cumpliera **a cabalidad** la tarea encomendada, en cuya virtud el juzgado de primera instancia procedió a dar aplicación a la figura del desistimiento tácito, única y exclusivamente respecto del ente frente al cual no se pudo concretar la citación oportunamente, esto es, el CONSORCIO METROPLÚS ORIENTAL 2019. Siendo adecuado advertir que la constancia de entrega, ya sí efectiva, al CONSORCIO METROPLÚS ORIENTAL 2019, se aportó cuando ya había vencido el plazo concedido en el requerimiento.

Aflora palmario entonces para esta Magistratura que el demandante no acató, en estricto, la carga procesal que le correspondía dentro del plazo estipulado; pues el cómputo de treinta (30) días otorgado finalizó sin que la diera completo cumplimiento a la carga procesal que le fue impuesta. Si bien, la parte actora tuvo la intensión de notificar a la parte demandada, no logró hacerlo en debida forma, por tal razón, las gestiones realizadas con el fin de cumplir la misma no fueron suficientes. Sobre este particular, resulta pertinente traer a colación la sentencia de tutela de fecha 9 de diciembre de 2020, donde la Corte Suprema de Justicia Sala Civil, unificó su criterio en cuanto al entendimiento que se le debe dar al artículo 317 del C.G.P., así:

4.- Entonces, dado que el *desistimiento tácito*» consagrado en el artículo 317 del Código General del Proceso busca solucionar la parálisis de los procesos para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, la «*actuación*» que conforme al literal c) de dicho precepto «*interrumpe*» los términos para se «*decrete su terminación anticipada*», es aquella que lo conduzca a «*definir la*

controversia» o a poner en marcha los *«procedimientos»* necesarios para la satisfacción de las prerrogativas que a través de ella se pretenden hacer valer.

En suma, la «actuación» debe ser apta y apropiada y para «impulsar el proceso» hacia su finalidad, por lo que, *«[s]imples solicitudes de copias o sin propósitos serios de solución de la controversia, derechos de petición intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi»* carecen de esos efectos, ya que, en principio, no lo *«ponen en marcha»* (STC4021-2020, reiterada en STC9945-2020).

Ahora, lo anterior se predica respecto de los dos numerales de la norma comentada, ya que además que allí se afirma que el *«literal c»* aplica para ambos, mediante los dos se efectivizan los principios de eficacia, celeridad, eficiencia, lealtad procesal y seguridad jurídica. No obstante, dado que prevén hipótesis diferentes, es necesario distinguir en cada caso cuál es la *«actuación eficaz para interrumpir los plazos de desistimiento»*.

Como en el numeral 1° lo que evita la «parálisis del proceso» es que «la parte cumpla con la carga» para la cual fue requerido, solo «interrumpirá» el término aquel acto que sea «idóneo y apropiado» para satisfacer lo pedido. De modo que si el juez conmina al demandante para que integre el contradictorio en el término de treinta (30) días, solo la «actuación» que cumpla ese cometido podrá afectar el cómputo del término.

En el supuesto de que el expediente *«permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación (...) en primera o única instancia»*, tendrá dicha connotación aquella *«actuación»* que cumpla en el *«proceso la función de impulsarlo»*, teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentre y el acto que resulte necesario para proseguirlo.

Así, el impulsor de un declarativo cuyo expediente ha estado en la *«secretaría del juzgado»* por un (1) año sin emplazar a uno de los herederos del extremo demandado, podrá afectar el conteo de la anualidad con el *«emplazamiento»* exigido para integrar el contradictorio.

Si se trata de un coercitivo con *«sentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecución»*, la *«actuación»* que valdrá será entonces, la relacionada con las fases siguientes a dicha etapa, como las *«liquidaciones de costas y de crédito»*, sus actualizaciones y aquellas encaminadas a satisfacer la obligación cobrada.

Lo dicho, claro está, sin perjuicio de lo dispuesto por la Corte Constitucional (sentencia C-1194/2008), en cuanto a que el *«desistimiento tácito»* no se aplicará, cuando las partes *«por razones de fuerza mayor, están imposibilitadas para cumplir sus deberes procesales con la debida diligencia»* (Resaltado intencional).

Lo anterior implica, de cara al caso concreto que: (i) el cumplimiento incompleto de la carga impuesta no suspende el término del requerimiento; (ii)

fue clara y debidamente sustentada la providencia en la que se requirió a la parte demandante y se le concedió el término de treinta (30) días para notificar a la parte demandada del auto que libró mandamiento de pago en su contra; (iii) no se cumplió con lo ordenado debida y cabalmente. De modo pues que estaría clara la configuración de los supuestos de hecho necesarios para dar aplicación a la causal 1ª del artículo 317 del Código General del Proceso.

2. No obstante lo anterior, estudiada en detalle la providencia que declaró la terminación del proceso por desistimiento tácito y el proceso, se advierte que la terminación sólo se decretó frente al CONSORCIO METROPLUS ORIENTAL 2019, decisión de terminación parcial que, de cara a la capacidad para ser parte procesal y a la figura del litisconsorcio necesario, resulta desacertada en este caso, como se pasa a explicar.

En la sentencia de unificación ya reseñada, el Consejo de Estado plantea que: *“si bien los consorcios y las uniones temporales **no constituyen personas jurídicas independientes**, sí cuentan con capacidad, como sujetos de derechos y obligaciones (artículos 44 del C. de P.C. y 87 C.C.A.58), para actuar en los procesos judiciales, **por conducto de su representante, sin perjuicio, claro está, de observar el respectivo jus postulandi.**” y “...en aquellos eventos en que varios o uno solo de los integrantes de un consorcio o de una unión temporal concurren a un proceso judicial, en su condición individual e independiente, deberán satisfacerse las reglas que deban aplicarse, según las particularidades de cada caso específico, para que los demás integrantes del correspondiente consorcio o unión temporal deban o puedan ser vinculados en condición de litisconsortes, facultativos o necesarios, según corresponda”³ (Resaltado intencional).*

Y la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia también citada, expone:

“En nuestro régimen legal, la capacidad es la aptitud que se tiene para ser sujeto de relaciones jurídicas, es decir, para realizar sin el ministerio de otra persona, actos con efectos válidos en la esfera del derecho, y si bien esa habilitación se vincula con la noción de persona, hasta el punto que toda persona, en principio, es capaz, salvo lo que en contrario disponga la ley, no es requisito necesario ser persona para disponer de capacidad jurídica. En estos eventos el Estatuto no se

³ Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, 03930, 2013.

refiere a una persona y sin embargo permite que los consorcios y las uniones temporales puedan contratar con el Estado, lo cual, en resumen significa que la ley les reconoce su capacidad jurídica a pesar de que no les exige como condición de su ejercicio, la de ser personas morales."⁴

De acuerdo entonces con las providencias emanadas por las altas cortes, resulta claro para este Tribunal que, cuando un Consorcio es demandado, lo adecuado es integrar el contradictorio con el consorcio y con todas las sociedades o entidades integrantes del mismo; esto por cuanto, si el consorcio al comparecer al proceso informa y prueba tener un representante común o elige uno para su representación, se pueda continuar el proceso con ese representante; pero, si no existe esa representación conjunta, estén también vinculadas todas las sociedades o entidades integrantes del consorcio para que ejerzan su derecho de defensa de forma separada, no siendo adecuado entonces, como lo hizo el *a quo*, dejar por fuera del proceso al CONSORCIO METROPLUS ORIENTAL 2019, máxime que en las facturas aquí cobradas, es éste, y no de forma separada las empresas que lo conforman, quien obra como obligado.

En consecuencia, a pesar de cumplirse los presupuestos para terminar el proceso por desistimiento tácito, se **REVOCARÁ** el auto apelado, porque la forma en la que se decretó la terminación, esto es, parcial frente al consorcio demandado, fue inadecuada y desconoce el tema de la capacidad para ser parte de los consorcios, como también la obligatoria integración del litisconsorcio necesario, no siendo procedente que este Tribunal decrete una terminación total del proceso, que podría haber sido viable en primer grado dada la falta de cumplimiento adecuado de la carga que impedía continuar el proceso, porque ello constituiría una reforma en peor para el apelante único.

Por lo expuesto, la **suscrita Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín,**

⁴ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, SC17429, 2015.

III. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR el auto de fecha 21 de noviembre de 2022, proferido por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, por lo explicado en detalle en esta providencia.

SEGUNDO. SIN CONDENA EN COSTAS por las resultas del recurso.

TERCERO. En firme este proveído **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE


MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO
Magistrada

(Firma escaneada conforme al artículo 105 del C.G.P. en concordancia con la Ley 2213 de 2022)